

# Otra agricultura es posible

No es el cambio de ministro lo que va a resolver la crisis institucional de la agricultura

Julio Santamaría Guerra

La encrucijada en que se encuentra el sector agropecuario no es exclusiva de nuestro país, sin embargo la forma en que se define la política agropecuaria y tecnológica es una tremenda irresponsabilidad de nuestro Gobierno. Veamos.

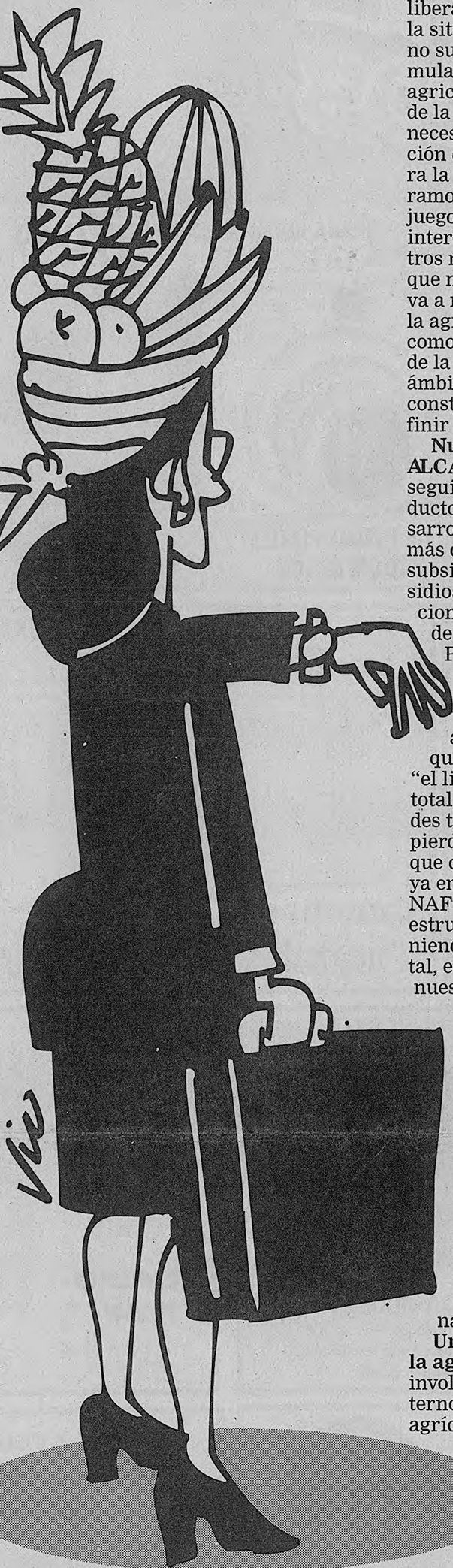
La designación de al menos los últimos tres ministros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha respondido estrictamente a criterios político partidistas de reparto de puestos públicos y al clientelismo del Gobierno hacia los representantes de segmentos importantes del sector: ANAGAN (Soussa-Lenox y Pose), agroindustriales (Gordón), agroexportadores (Stanziola). Desde esta perspectiva es lógico esperar que los así designados ministros adopten un discurso demagógico de desarrollo agropecuario mientras protegen y favorecen los intereses que representan.

Una vez en la posición se rodean de asesores escogidos más por afinidades políticas que por el perfil profesional y adoptan un modelo personalista de gestión en el afán de "hacer historia" o carrera política basados en el clientelismo que derraman en cascada hacia los circuitos electorales o segmentos de la producción agropecuaria que pueden significar más votos en las próximas elecciones. A lo interno las reestructuraciones se limitan al pase de factura, apoyadas en un autoritarismo que contradice su discurso participativo y de desarrollo de las capacidades humanas para el desarrollo rural con sostenibilidad.

Para maquillar su falta de competencia para una gestión comprometida con los intereses estratégicos del sector agropecuario y que por lo tanto trasciende los intereses excluyentes de cualquier segmento en particular, buscan el asesoramiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que viene sufriendo la misma crisis de legitimidad y está en reestructuración permanente para sobrevivir, sin percibir que su muerte ocurrió simultáneamente con el fracaso del modelo socioeconómico que le dio vida. Un análisis cuidadoso del Plan Panamá Rural preparado por el IICA al ministro Gordón, evidencia que no es diferente al mamotreto que el IICA le preparó al ministro del gobierno anterior. También el IICA se cuida de que sus intereses estén asegurados, creando nuevos proyectos y fondos de desarrollo agropecuario que el propio IICA "administra" (en realidad solamente confecciona los cheques), cobrando una significativa comisión por ello.

Con respecto a su principal función de generación y transferencia de tecnología, esta se caracteriza por el tratamiento superficial y los giros de 380 grados (para volver al mismo lugar donde comenzaron). Las organizaciones de investigación y difusión de tecnología fueron exitosas cumpliendo las funciones que les asignaba el modelo de desarrollo dominante. Con la declinación o el agotamiento de esos modelos de desarrollo, también los modelos de actuación institucional han perdido su potencial innovador y requieren de un cambio cualitativo para adecuarse a las nuevas realidades emergentes.

En síntesis, no hay discusión de las premisas, enfoques, modelos y reglas



liberal y de lógica del mercado porque la situación actual es su consecuencia, no su antecedente. Esto implica la formulación de propuestas claras de la agricultura que queremos construir, de la educación rural y ambiental que necesitamos, los procesos de generación de conocimiento y tecnologías para la nueva sociedad a la que aspiramos y de las nuevas "reglas del juego" para las relaciones sociales y de intercambio y para el manejo de nuestros recursos naturales. De manera que no es el cambio de ministro lo que va a resolver la crisis institucional de la agricultura. Tanto los productores como el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en el ámbito rural y ambiental necesitan construir un amplio consenso para definir entre otros aspectos:

**Nuestra posición con respecto al ALCA:** No nos podemos dar el lujo de seguir siendo el vertedero de los productos subsidiados de los países desarrollados que invierten anualmente más de 300 mil millones de dólares en subsidios a sus productores. Los subsidios son un asunto de interés nacional no solamente para los países desarrollados, sino también para Panamá, sobre todo si reconocemos la heterogeneidad estructural de la agricultura y la concentración de la pobreza en las áreas rurales. De la manera en que se propone el ALCA, basado en "el libre comercio" y la "protección total de las inversiones" de las grandes transnacionales no solamente se pierde la soberanía alimentaria, sino que conduciría (como está sucediendo ya en México con la aplicación del NAFTA) al desmantelamiento de las estructuras productivas del campo, poniendo en riesgo la viabilidad ambiental, económica, social y política de nuestro país.

**Una nueva relación campo-ciudad:** Desde el punto de vista técnico, social, económico y sobre todo humano, una nueva estrategia para el sector agropecuario es perfectamente posible. La agricultura no solamente es productora de alimentos e insumos agroindustriales y generadora de empleos rurales. Otras funciones deben ser reconocidas como la de ofrecer viabilidad a la sociedad rural, el custodio de los recursos naturales y la biodiversidad, y en el desarrollo de la cultura nacional.

**Una nueva institucionalidad para la agricultura:** El cambio tecnológico involucra un cambio cultural a lo interno de los sistemas de conocimiento agrícolas, por lo tanto el productor rural y su familia no intervienen de manera pasiva (aceptando o rechazando el cambio tecnológico), sino que estimulan e influyen los procesos innovadores, a partir de su propia visión y comprensión del mundo. Es necesario, por lo tanto, reorientar los esfuerzos de investigación, desarrollo tecnológico para la agricultura con el fin de encontrar soluciones integrales para los complejos problemas que afectan a la población rural, reconociendo la contribución del conocimiento y experiencias locales. La nueva institucionalidad del sector agropecuario debe establecer nuevas reglas del juego y nuevos roles a los actores del desarrollo rural desde una perspectiva social con equidad e inclusión, y crear espacios interactivos y de comunicación para la innovación hacia una agricultura sostenible y el manejo de los recursos rurales.

Ya hemos señalado en un escrito anterior que "Los cambios en el contexto regional y global son la expresión de profundas transformaciones simultáneas en la economía, las relaciones de poder, la cultura y la experiencia humana, en dirección a una nueva época histórica" (*El Panamá América*, 02/13/2002). Por lo tanto, una propuesta alternativa a la crisis agropecuaria debe salirse de los marcos de la institucionalidad neo-

El autor es ingeniero agrónomo, especialista en innovación institucional

# Sabotaje en Chiriquí: lo que hay de fondo

Rogelio Pretto

El caso de sabotaje en el hotel Los Quetzales está a punto de arder. Es bueno que esté tomando calor el asunto. Solo así las autoridades le darán la atención que exige el problema... y merece. Lo que hay de por medio no es solo un grave delito penal que resulta ser el atentado contra el hotel, sino también la urgente necesidad de solucionar el problema de fondo en un conflicto que ha resultado en la contaminación intencional del agua de una empresa, y la agresión física de su dueño por parte de contrarios que se disputan con el hotelero el uso de un camino de servidumbre que cruza por su complejo ecoturístico.

La pelea por el uso del camino viene calentándose desde mucho antes del atentado en el hotel hace dos semanas. Durante años Carlos Alfaro, férreo ambientalista y dueño de Los Quetzales, viene denunciando violaciones al parque de parte de ganaderos, taladores y cazadores empeñados en acondicionar el camino en disputa para permitir el transporte del producto de su explotación ilegal de la reserva. Alegando tener el derecho legal de hacerlo, Alfaro ha querido cerrarles el paso por Los Quetzales a los que él acusa de usar el camino para fines que van en contra de la reglamentación del parque. Los denunciados, a su vez, acusan al hotelero de prohibir arbitrariamente el uso de un camino público de servidumbre protegido por la ley, cosa que Alfaro niega. El asegura que nunca ha prohibido el uso legítimo del camino y que la gente del área lo ha venido usando durante años sin problemas. Son sus acciones contra el uso indebido del paso de servidumbre lo que ha levantado la ira de algunos que, en represalia, han respondido a sus denuncias con actos de violencia contra su hotel y su persona, y atropellos por parte de autoridades locales que se prestan para intimidarlo y aplicarle presión.

En este cruce de acusaciones se la han pasado las dos partes, sin que la autoridad que rige el PILA resuelva el conflicto de manera firme y final con la aplicación de las leyes que, en forma clara, regulan las actividades públicas y privadas dentro de la reserva. Mejor será que lo hagan, y sin mucha demora. Con el atentado reciente en el hotel y la agresión personal que sufrió Alfaro y la turista que transportaba, el conflicto ha tomado una calentura mucho más seria que podría terminar en algo lamentable y potencialmente trágico, sin mencionar las consecuencias contra el turismo nacional que podrían arrastrar consigo.

A nosotros nos consta que Alfaro por su lado -y por su cuenta- ha venido presentando sus denuncias legítimas y formales ante las autoridades locales y nacionales sin que le hayan hecho mucho caso. Contrariamente, los denunciados han contado con el respaldo de autoridades locales que, prepotentemente y sin derecho alguno, según Alfaro, han removido a la fuerza los impedimentos que él ha instalado para restringir el uso impropio del camino. Y más preocupante aún, es que, con el escudo político que aprovechan estos transgresores, los daños al PILA se agrandan peligrosamente. Como si contaran con un buen apadrinamiento, van marcha adelante con su irresponsable intento de ensanchar el camino y prepararlo para el transporte del producto de las actividades destructivas que llevan dentro del parque.

Este tipo de aprovechamiento de palanca política es común en nuestro país, donde la corrupción corroe hasta las más lustradas alturas del Gobierno. Pero tenemos mucho que perder como nación en esto, si por estar habituados a lo corrupto seguimos permitiendo que quede impune el ultraje incontinente de nuestras acabables reservas forestales.

Antes de que ocurra lo impensable, las autoridades debe hacerse presentes en el caso de Los Quetzales. Exhortamos a la PTJ para que investigue el sabotaje, pero de verdad. A la ANAM a que cumpla sus obligaciones como autoridad máxima del PILA. Al IPAT para que haga su parte en asegurar que un puñado de rufianes no vuelva a poner en perjuicio la salud y la vida de turistas. A la corregiduría del distrito a que responsable y justamente responda a los dictámenes de su oficio. Y, finalmente, a la alcaldía de la comunidad para que dé el buen ejemplo en señalar y condenar como intolerable en su vecindad el acto vil de los atacantes del empresario Alfaro y su hotel.

Sin el justo respaldo de las autoridades, ¿qué oportunidad real tiene gente admirable y de conciencia cívica como Alfaro de lograr que se protejan nuestras reservas y se respeten sus leyes, y reciba justicia por los asaltos a su persona y propiedad? Su lucha es cuesta arriba y de buen empino, pues a cada paso de su causa se ve obligado a señalar a algunos de autoridad que por su ineptitud o falta de voluntad en aplicar las leyes claras del país, la entorpecen. Resentidos, estos se vuelven en su contra y le restan apoyo. Parece que no habrá otra que llevar el asunto a los tribunales, donde tal vez, solo tal vez, encuentre Alfaro el amparo al fin de una justicia honesta que proteja lo que a todos nos pertenece.

El dice que llevará su lucha hasta el final. Yo estaré con él.

El autor es artista y pintor

# demosgracia

